

DECLARACIÓN FINAL
FORO PARLAMENTARIO MUNDIAL

**FORO
PARLAMENTARIO
MUNDIAL**

Como participantes del Foro Parlamentario Mundial, llevado a cabo en Montreal el 09 de agosto de 2016, en el marco del Foro Social Mundial; representantes electos de organizaciones políticas de todos los continentes que hacen suya la Carta de Porto Alegre, junto a representantes de los movimientos sociales y junto a ciudadanas y ciudadanos comprometidos, adoptamos la siguiente declaración:

Denunciamos al Estado canadiense, que ha prohibido la entrada y estadía de numerosos participantes en el Foro Social Mundial, comprometidos con la paz, la democracia, la justicia social y el medioambiente, entre los cuales se encuentran varios parlamentarios.

Hace 16 años, en Porto Alegre, Brasil, El Foro Social Mundial provocó la convergencia –por primera vez a escala planetaria- de las resistencias en contra del neoliberalismo y la globalización capitalista. Desde tal fecha, los Foros sociales locales, regionales y mundiales han sacado a luz las mentiras del neoliberalismo; han dado voz a las luchas sociales y no han cesado de proponer alternativas.

Saludamos ahora a las personas comprometidas con los movimientos sociales, a las organizaciones políticas progresistas y a los colectivos locales que luchan sin pausa por una sociedad mundial libre, igualitaria y ecologista.

El año 2000 fue también el año de la primera Marcha Mundial de las Mujeres, que se realizó por iniciativa del movimiento de las mujeres de Quebec. Debemos ahora subrayar los objetivos, siempre vigentes, de esa Marcha: Poner fin a la pobreza y a la violencia de la cual son víctimas las mujeres. En nuestra lucha por la justicia social, favoreceremos la igualdad económica y la paridad política, tanto dentro de nuestras organizaciones como en la sociedad. La soberanía de los pueblos no será posible sin la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos y sobre su vida económica.

La mentira de la austeridad y del neoliberalismo

A pesar de nuestras luchas y de las convergencias, los gobiernos aplican recetas neoliberales prometiendo supuestos beneficios del libre mercado para los habitantes. Las políticas del neoliberalismo acentúan el enriquecimiento de las grandes corporaciones y del 1% más rico, en detrimento de la mayoría de la población, particularmente de las mujeres, los jóvenes y las poblaciones racializadas. La desobligación social afecta principalmente a los servicios sociales y comunitarios, a menudo a cargo del trabajo femenino, sea o no remunerado.

Luego de las sucesivas crisis financieras mundiales, los gobiernos han rescatado a los mercados financieros con dinero público, siendo éstos los responsables de los desequilibrios económicos, con la adopción de medidas de austeridad social que

ahogan a la población y aumentan las inequidades. Además de eso, la llamada austeridad impide la conversión ecológica de la economía, así como la satisfacción de las necesidades esenciales de la población.

Reiteramos que la crisis de la deuda pública es un instrumento de dominación de los sectores financieros sobre los pueblos. Para alcanzar las exigencias de los acreedores internacionales, los estados se ven obligados a recortar drásticamente en el gasto social, a privatizar las empresas públicas y a entablar reformas estructurales que benefician a las clases dominantes y a las empresas transnacionales.

Como participantes en el Foro Parlamentario Mundial procedentes de países antiguamente colonizados, así como también de países del Norte defraudados por las instituciones financieras, exigimos la anulación de las deudas de Estado insostenibles, así como apoyamos la lucha a nivel institucional para el reajuste de las deudas públicas de los países del Sur europeo.

Para financiar adecuadamente los servicios públicos, será urgente impedir la evasión fiscal de los ricos y de las grandes sociedades. Para ello, creemos necesaria la instauración de instituciones intergubernamentales que puedan regir y sancionar todo tipo de prácticas fraudulentas.

Tratados de libre cambio: hacia alternativas populares

Uno de los principales pilares del capitalismo neoliberal es el establecimiento de tratados de libre cambio entre los países, con el fin de facilitar el comercio de bienes y servicios a través de la abolición de las tarifas aduaneras y de normativas sociales y medioambientales, tanto como de la eliminación de los soportes públicos a las industrias nacionales. Para asegurar el respeto de estos tratados de libre cambio, los estados aceptan la instauración de tribunales supranacionales oscuros, que tienen el poder de dirimir conflictos que puedan oponer a gobiernos e inversionistas y multinacionales que en algún momento consideren que sus intereses comerciales fueran perjudicados. Los intereses foráneos podrían así exigir a los estados sumas gigantescas a título compensatorio, pasando por encima de su facultad de legislar en favor de los derechos sociales y medioambientales de sus habitantes.

En los hechos, los tratados de libre cambio exigen a los estados la renuncia a su capacidad de legislar en beneficio de sus poblaciones e impiden, por consiguiente, el ejercicio pleno e íntegro de la soberanía popular. Son, en resumen, instrumentos del sometimiento de los pueblos a los intereses del capitalismo financiero y conducen al aumento de las desigualdades sociales.

Nos oponemos a esos acuerdos de libre cambio y, en lo inmediato, al Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre Canadá y la Unión Europea; al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP); a la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI); al Acuerdo sobre el Comercio y los Servicios (TISA), y a los acuerdos de libre cambio impuestos a los países en desarrollo. Exigimos que la ratificación de esos acuerdos por parte de los parlamentos nacionales no se pueda hacer sin un debate que incluya a la población de los países en cuestión.

Los acuerdos de libre cambio son utilizados para tratar de subvertir la jerarquía de las normativas e instaurar una supremacía inaceptable de los derechos comerciales por sobre los derechos humanos y el bienestar de las poblaciones locales. Esto debe cesar. Es una condición esencial para la consecución de nuestros objetivos en materia de equidad, de justicia y de protección al medioambiente.

Como militantes de las fuerzas progresistas y de los movimientos sociales, exigimos transparencia en la negociaciones comerciales. Nos oponemos a acuerdos de libre cambio que perjudiquen a los pueblos y al medioambiente, y trabajamos para multiplicar y consolidar las alternativas a esas políticas neoliberales.

Proponemos tratados que refuercen la solidaridad entre los pueblos y la integración de los sistemas de protección social. En el plano de las normas internacionales, exigimos la preeminencia de los derechos humanos y pedimos que se avance en las Naciones Unidas, sobre un tratado obligatorio para las empresas y los derechos humanos, y porque sea aplicable plenamente el principio de diligencia debida en lo que concierne a las empresas transnacionales.

Las luchas comunes por la paz mundial, la defensa de la democracia y los derechos humanos

Las contradicciones del sistema capitalista e imperialista llevan cada vez a la humanidad al borde de la barbarie.

La experiencia de América Latina para poner término a los conflictos armados es también una senda a considerar. El proceso de resolución del conflicto colombiano surtió efecto gracias a la participación de una instancia preocupada de la cuestión humanitaria: el gobierno de Cuba.

A pesar del restablecimiento de relaciones formales entre Cuba y Estados Unidos, denunciamos el mantenimiento del bloqueo económico sobre Cuba. La normalización de las relaciones implica el levantamiento completo y a la brevedad del bloqueo y la restitución del territorio de Guantánamo al pueblo cubano.

Denunciamos, además, los esfuerzos de desestabilización de gobiernos progresistas democráticamente electos. El golpe de Estado en Brasil ilustra la manera vergonzosa con que la oligarquía pretende manipular, con mentiras y propaganda, a las instituciones democráticas para su propio beneficio.

Frente a los ataques permanentes del imperialismo en contra del gobierno popular de la República Bolivariana de Venezuela, redoblados con una feroz campaña en los grandes medios internacionales, que desvirtúan la realidad venezolana, expresamos nuestro apoyo y solidaridad a la Revolución bolivariana, y apoyamos a sus instituciones democráticas como expresión de la soberanía popular. Asimismo, rechazamos cualquier forma de injerencia en los asuntos internos de Venezuela y exigimos el respeto al principio de libre autodeterminación de los pueblos y el respeto al soberano derecho del pueblo venezolano de decidir su propio destino. Denunciamos igualmente la campaña de sabotaje económico impuesto por las elites y el imperialismo que golpea duramente al pueblo de Venezuela.

Condenamos con el mismo ahínco, las tentativas de los sectores más recalcitrantes de la derecha y de la oligarquía en El Salvador, así como los decretos antidemocráticos adoptados por la Cámara constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que busca crear un clima de inestabilidad política, social y económica. Rechazamos cualquier acción interna o externa que busque desestabilizar al actual gobierno o desembocar en un golpe de Estado.

El futuro de la paz en Medio Oriente, en Irak y en Siria en particular, pasa sobre todo por una paz justa negociada que implique a todos los componentes de la sociedad para permitir una verdadera solución democrática a los conflictos armados y al problema que ponen el grupo Daesh y sus aliados.

Saludamos la heroica lucha de Rojava (Kurdistán occidental) y el combate de mujeres y hombres kurdos por su liberación, su autodeterminación y su identidad. Consideramos que la experiencia de autonomía democrática en Rojava puede ser utilizada como modelo para resolver múltiples conflictos etno-nacionales, religiosos y sectarios en Medio Oriente y aun fuera de esa región. Denunciamos las políticas represivas del gobierno turco en contra de los kurdos, cuyos diputado(a)s, alcaldes y alcaldesas, políticos y políticas, así como activistas, son sistemáticamente perseguidos. El estado turco debe poner fin inmediatamente a sus políticas belicistas, reanudar el proceso de paz que ha suspendido y encaminarse a un acuerdo democrático con el movimiento kurdo.

La resolución de los conflictos en esta región pasa obligatoriamente por una conciliación negociada que apunte a la creación de un Estado Palestino viable, reconocido internacionalmente a la par del estado de Israel, tal como fue decidido por las Naciones Unidas, con las fronteras de 1968 y Jerusalem-Este como capital del Estado Palestino. Así también, el fin de la ocupación militar israelí de los

territorios árabes, el reconocimiento de los derechos fundamentales de los palestinos y palestinias, principalmente el derecho al retorno, llamando a Israel a respetar también los derechos de 1.5 millones de palestinos entre sus propios ciudadanos.

Constatamos, sin embargo, que Israel rechaza cualquier solución negociada, lo que conlleva a un estancamiento en ese conflicto. La comunidad internacional, tanto gubernamental como civil, debe presionar a Israel para llevarlo a negociar de buena fe.

Por otra parte, nos preocupa la criminalización, en algunos países -entre ellos Canadá- de las campañas internacionales no violentas de apoyo a Palestina, particularmente la campaña Boycot, Desinversión y Sanciones (BDS).

Reafirmamos que el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos concierne a todas las personas, sin perjuicio de su origen, identidad u orientación sexual, raza o género. Apoyamos la lucha en contra de la homofobia y la transfobia, así como la creación de una Convención internacional sobre la diversidad sexual.

Frente a las oleadas de personas refugiadas y migrantes que han arribado a los países del Norte luego de los conflictos en Medio Oriente y el África, la Unión europea, Estados Unidos y Canadá han sido, hasta ahora incapaces de responder adecuadamente a la crisis humanitaria.

Sobre el asunto de la migración, denunciamos la fortificación fronteriza en Europa, en detrimento del deber de proteger a las poblaciones que huyen de la guerra; también denunciamos la construcción de un muro entre Estados Unidos y México.

Denunciamos la delirante seguridad que estigmatiza a comunidades completas en respuesta a actos terroristas cometidos por algunos individuos. La protección de la población debe realizarse con el debido respeto de los derechos fundamentales y las garantías jurídicas, sin lo cual sólo favorece a los fundamentalismos.

Ofrecemos nuestro apoyo a las luchas de los autóctonos, particularmente en el Estado canadiense en donde nos reunimos ahora, reconociendo la opresión ininterrumpida que sufren las Primeras Naciones desde la conquista europea.

Creemos que la solución contra esa opresión de los pueblos autóctonos sólo será posible mediante su autodeterminación completa, obtenida en negociaciones basadas en el eje del principio de nación a nación.

Las fuerzas progresistas e internacionalistas reunidas en el Foro Parlamentario Mundial reiteramos una vez más el derecho de autodeterminación de los pueblos, incluyendo la independencia si es expresada democráticamente. El reconocimiento

de los pueblos al autogobierno es, no solamente un derecho fundamental, sino una solución a numerosos conflictos armados en el mundo.